



Rastreando el pasado

Hacia dónde va la Paz

JOSE JOAQUIN MATA LLANA B.
General (r)

Ante la magnitud que la violencia en Colombia alcanzó en 1988, especialmente en sus modalidades de violencia política generada por la subversión, la que desarrolla el narcotráfico y la ejecutada por los llamados "grupos paramilitares" en estrecha relación con carteles de la droga, resulta oportuno analizar la "Iniciativa de Paz" que el actual Gobierno puso en marcha el pasado 10. de Septiembre. Para que sea objetivo, tal análisis debe considerar tanto las principales experiencias del proceso de paz del Presidente Betancur como los grandes escollos que le están saliendo al paso, así como también debe considerar lo logrado hasta la fecha y las circunstancias políticas, psicológicas y militares que son favorables al plan del Presidente Barco. El balance de estos factores nos permitirá determinar la *viabilidad* del proceso para alcanzar su objetivo.

Antecedentes

El tema del proceso de paz Betancur y el hecho de que no culmi-

nara ha sido uno de los más debatidos en los últimos 6 años y en verdad que ha faltado serenidad y honestidad intelectual en la gran mayoría de quienes lo abordaron y en el grueso de la opinión pública que lo comenta. El silencio del Expresidente ante los ataques y distorsiones ha permitido que gran parte de la opinión pública acepte, o se haya hecho a la idea de quienes, por superficialidad en sus juicios o por mala fé, combatieron ese proceso pretendiendo ignorar factores o circunstancias determinantes para que tal iniciativa, promovida con tanto empeño por él, no alcanzara plenamente su propósito. Veamos algunos:

- No se realizó una campaña seria y constante hacia el desarme de los espíritus y de educación para la paz.
- Las Fuerzas Armadas no fueron preparadas adecuadamente para entender y facilitar el proceso de paz.
- El Gobierno desestimó la campaña sistemática que, tanto los partidos tradicionales como la extrema derecha, los gremios

de la producción y buena parte de los medios escritos de comunicación, mantuvieron a nivel nacional y regional para restarle credibilidad, desinformar y minar la confianza pública sobre la buena fé que podría animar a los jefes de la guerrilla en sus compromisos de tregua hacia un pacto de paz. Nadie del Gobierno salió al paso de esas embestidas no obstante su poder discrecional en el empleo de la radio y la televisión.

- No se permitió que la Comisión de Verificación investigara a fondo y se pronunciara sobre responsabilidad en los incidentes surgidos.
- Se dejaron sin respuesta oportuna afirmaciones inexactas, de gran impacto en la opinión pública tales como: que el Presidente y el Gobierno se interponían cada vez que la fuerza pública estaba a punto de dar golpes decisivos a la guerrilla; que los grupos alzados en armas estaban mejor armados y dotados que las Fuerzas Armadas, y que los campamentos

guerrilleros durante la etapa de la firma de los acuerdos y la tregua eran "Repúblicas Independientes".

- Los partidos tradicionales sabotearon el proceso al oponerse con arrogancia al "Diálogo Nacional", acordado entre el Gobierno y la guerrilla y reglamentado por decreto. Por boca de sus principales líderes en el Congreso rechazaron que se les presentaran propuestas y sugerencias alegando que ellos conocían plenamente la situación del país y que no estaban dispuestos a aceptar imposiciones, no obstante que la norma del Gobierno contemplaba la presentación de las iniciativas a él mismo, o al Congreso, por canales normales y legales.
- En varias circunstancias dramáticas que el Gobierno debió atender, tales como el acto de firma de los acuerdos con las FARC —postergado por meses por falta de garantías—, el asedio de la fuerza pública a los campamentos de Corinto y Yaurumales del M-19, o en las dramáticas horas de la lucha en el Palacio de Justicia, la verdad es que la autoridad del Presidente de la República no se hizo sentir en el grado y con la decisión que esas situaciones demandaban.

La iniciativa de Paz Barco.

El actual Gobierno perdió 2 años en promover y presentar un plan concreto de paz. Sus argumentos para no hacerlo en la primera mitad de su período no fueron claros ni convincentes. Ante todo dejaba ver su obsesión de que lo que proyectara en nada se asemejara al plan del Gobierno anterior, al que siempre calificó de "vago", sin metas y manejado por personas sin representatividad directa del Gobierno, no obstante que aquellas comisiones de su antecesor fueron designadas por decreto y con funciones bien determinadas. Tenía también un Presidente de la Comisión de Paz con misiones de asesoría, coordinación y representación ante los al-

zados en armas, similares a las que hoy cumplen eficazmente el Doctor Rafael Pardo Rueda y sus compañeros de asesoría.

Si bien los acuerdos iniciales con las FARC y demás grupos dejaron graves vacíos, atribuibles no sólo al Presidente sino a todo su equipo de gobierno, de los cuales maliciosamente se aprovecharon los alzados en armas, una semana antes de las elecciones de Marzo de 1986 tales vacíos fueron llenados y al menos los jefes de las FARC se comprometieron solemnemente a cumplir lo acordado que, obviamente, requería un esfuerzo especial de verificación, que no se hizo.

El secuestro del Doctor Alvaro Gómez Hurtado forzó al Gobierno a elaborar y presentar, sin más demora, la iniciativa que está en marcha. No obstante la representatividad de la "Comisión de Convivencia Democrática" y la excelente disposición de todos sus miembros para actuar desde ella en apoyo decidido al plan de paz, se le marginó y hasta se tuvo para con ella respuestas y actitudes de desaire o escasa consideración, que determinaron su receso definitivo.

En la actual Iniciativa de Paz hay factores positivos que han permitido el avance que se registra con el M-19 a pesar del escepticismo, la crítica no siempre justa y hasta la acción intrépida que se está haciendo presente para hacerla fracasar. Mencionemos algunos:

- Hay claridad en los planteamientos y exigencias del Gobierno
- Las fases en que se ha concebido el proceso son lógicas y realizables desde que exista buena fé en las partes comprometidas
- Los Consejos Regionales de Normalización y los diálogos regionales están resultando instrumentos útiles para promover la convivencia, hasta el punto que los jefes regionales del movimiento alzado en armas se han vinculado a tales diálogos con ánimo positivo.

- No se hace excesivo énfasis en la entrega de las armas como requisito para proseguir en el proceso, porque el Gobierno ha llegado a entender que en estas situaciones lo importante es desarmar los espíritus, crear condiciones políticas adecuadas para los rebeldes y para las clases marginadas, de tal validez que hagan innecesaria la lucha armada y propicien el regreso espontáneo a la vida civil de la guerrilla y a la acción política legal si así lo desean.

Pero es necesario también precisar algunos aspectos negativos de la iniciativa gubernamental, que son los que pueden retardar, y quizás hasta detener, el proceso en marcha:

- El texto del plan de paz ignoró el problema que para su desarrollo planteaban los llamados "grupos paramilitares", no obstante que para la promulgación del documento ellos ya representaban una fuerza considerable que, por el número y filiación de sus víctimas, por los medios de que disponían y su despliegue en el territorio nacional, era preciso consignar la decisión de hacerles frente, pues resultaba utópico esperar la desmovilización de la guerrilla cuando ya más de 700 activistas de la UP, nacida de los acuerdos de LA URIBE, habían caído acribillados por dichos grupos, reconocidos por el Gobierno ante el Congreso pero sobre los cuales ninguna acción eficaz se había cumplido por parte de las autoridades del Ejecutivo ni de la Rama Jurisdiccional.
- El Gobierno se aferraba —y sigue aferrado— al concepto de que, para entrar a diálogo con los grupos alzados en armas, exige el cese de sus actividades de violencia como demostración de la buena fé que los anime de integrarse al proceso y llegar a la desmovilización y reintegro a la vida civil. Plantea así mismo que no dialogará directamente con los jefes de la guerrilla sino con representantes suyos que no tengan sindicación penal. En

mi opinión esta posición oficial no es realista, en primer lugar porque, como se ha visto en todos los conflictos de este tipo en el mundo, cuando se quiere poner términos a una lucha armada que está en proceso y en la que no se derrota totalmente al adversario, si se desea terminar el enfrentamiento y llegar a la paz—como es nuestro caso—hay que buscar y realizar el diálogo entre las partes en conflicto, para que a través de él se acuerde al menos una suspensión total de las acciones de fuerza, así resulte transitoria por no llegar-se a acuerdo que conduzca a la

dos en armas que se acogen al proceso.

Tampoco es realista el plan del Gobierno al ignorar la campaña de desinformación que sobre este proceso desarrollan, y tratarán de seguir desarrollando, los halcones de varias instituciones, entidades, medios de comunicación y hasta gobiernos u organismos extranjeros que por razones geopolíticas, ideológicas o de otra índole, pueden estar interesados en que prosiga la violencia en Colombia.

La exigencia de dialogar sólo con representantes de la guerri-



Comisión de paz con las Farc en 1985: la historia no se repite

paz. Y para que si tal diálogo logra ese primer objetivo, en la seriedad de un CESE AL FUEGO se explore ampliamente la real voluntad de las partes, se exijan demostraciones concretas del propósito de paz, se determinan los pasos que han de seguirse hacia la desmovilización, se acuerde el procedimiento de control de lo acordado y se dé la debida atención al punto crucial de las *garantías para la vida y para el desarrollo de las actividades fuguras de los alza-*

lla que carezcan de antecedentes y sindicación penal vigente carece también de realismo, pues todos los guerrilleros son sindicados y porque quienes no son sus jefes naturales mal pueden adquirir compromisos serios que tengan la fuerza suficiente para ser acatados por todas sus fracciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

No se contempló un freno al armamentismo del pueblo colombiano, ni el desarme progresivo, como aspecto fundamental para la paz.

Viabilidad de la iniciativa de paz

Cumplidos 7 meses de promulgado el plan del Presidente Barco, es preciso puntualizar los factores que al comenzar el mes de Abril de 1989 contribuyen a su desarrollo exitoso y cuáles los principales obstáculos que tratan de impedir su realización.

Entre los primeros deben tomarse en consideración:

- La motivación nacional, casi unánime, hacia la paz.
- El apoyo de los partidos tradicionales, incluso el de oposición, así como el de otros movimientos políticos, la Iglesia, los gremios de la producción, las organizaciones laborales, estudiantiles y campesinas, así como los medios de comunicación.
- Los recientes golpes a los grupos paramilitares y el descubrimiento por el DAS de su organización, enormes medios y recursos, entrenamiento y magnitud de sus acciones criminales. Dejaron hace tiempo de ser las "autodefensas" generadas por los atropellos de la guerrilla a los empresarios agropecuarios y a los medianos y pequeños propietarios rurales, para convertirse en fuerza ofensiva que inspirada en una filosofía de extrema derecha, se ha desplegado por el territorio nacional en circunstancias que sería ingenuo aceptar la explicación de ciertas autoridades sobre ignorancia de su existencia y actividades.
- La actitud prudente de las Fuerzas Armadas ante el proceso que se ha puesto en marcha, como una demostración de su abnegación, disciplina y lealtad con el Gobierno Nacional en tanto que, según trasciende, se preparan con esmero para operar con la máxima eficacia contra los violentos de todas las tendencias y para proseguir la lucha antiguerrillera si, por desgracia para Colombia, este proceso de paz no condujera a la meta que todos anhelamos. Simultáneamente se revisan los procedimientos y medidas de

control, a todos los niveles, para que el pueblo colombiano tenga la certeza de que, si han de seguir combatiendo, lo harán con sujeción a los principios de humanidad, de respeto a los no combatientes y con el ejercicio de la fuerza en el grado indispensable para alcanzar el objetivo que se les asigne en cada situación y en cada operación.

Entre los escollos que aparecen ya contra la iniciativa no pueden ignorarse:

- En el campo político, seguramente el más grave es la actitud del partido Comunista al haber aprobado en su reciente Congreso Nacional la estrategia que *combina todas las formas de lucha* como política oficial de ese Partido que la "línea dura" logró imponer, acompañada de claras alusiones de apoyo al movimiento armado. Con esta decisión los camaradas criollos se situaron en contravía de lo que significan las grandes rectificaciones y cambios que, tanto en la estructura como en la imagen del régimen soviético, viene realizando y sustentando el Presidente Mikhail Gorbachov.
- También en el campo político está la actitud egoísta y utilitarista de la dirigencia política de los partidos tradicionales, que siguen consagrando en la práctica un régimen cerrado y excluyente y que se refleja en buena parte en los acuerdos que, contra el auténtico sentir de la Nación, plasmaron como texto de la reforma constitucional en la primera vuelta. En él dejaron de lado importantes iniciativas recogidas durante los pocos días que el Gobierno facilitó a los ciudadanos y entidades presentar propuestas para reformas a la Constitución y a lo cual respondieron importantes instituciones y muchos ciudadanos eminentes, patriotas y eruditos en la materia. En cambio mostraron su propósito de apuntalar mejor los vicios que de tiempo atrás han conducido al desprestigio del Congreso ante la opinión pública. Entre ellos, man-

tener la irresponsabilidad del congresista ante sus electores, la reelección indefinida, la existencia de dos Cámaras con funciones iguales, la carencia de un régimen serio de incompatibilidades por lo cual se burla la voluntad popular al aceptar los representantes del pueblo cargos en otras Ramas de la Administración pública, dentro y fuera del país y la consagración —ahora como norma constitucional— de prebendas tan aberrantes como la de disfrutar anualmente de vacaciones en el exterior con viáticos en dólares.

Los políticos deben hacer conciencia de que, mientras no corrijan estos y muchos otros errores, y mientras no adopten las normas que se le han venido exigiendo para que la democracia colombiana se amplíe y se haga más participativa, será difícil o imposible llegar a un acuerdo viable de paz.

- En el campo psicológico, bastante daño vienen haciendo al proceso de paz los políticos de los escritores y columnistas que insisten en las tesis que hicieron fracasar el proceso anterior. Apelan a argumentos y ejemplos falsos o con verdades a medias, como el que la derrota de la guerrilla venezolana fue requisito previo a la paz interior de que ha venido disfrutando esa Nación, ¡que ahora nos enseña democracia! O ponen los medios de comunicación a disposición de quienes, a base de desinformación, tratan de impedir que se llegue al diálogo y la negociación con todos los grupos alzados en armas.
- En el campo militar, no se contemplan un *cese al fuego* que comprometa tanto a la guerrilla como a la fuerza pública, para que sea viable; tampoco quiere el Gobierno establecer una entidad verificadora del acatamiento a los acuerdos a que se llegue, no obstante que el sentido común, la experiencia de otros conflictos similares y las reiteradas recomendaciones que se le hacen desde distintos sectores así lo aconsejan.

Los amigos de la paz esperamos que el Presidente Barco y su Gobierno hagan frente a estos y otros obstáculos, aplicando el enorme poder que en Colombia tiene la cabeza de la Rama Ejecutiva. Que concrete al Partido Comunista sobre sus verdaderos propósitos y si apoya o no al desarrollo de la Iniciativa de Paz. Que responda el Gobierno oportuna y claramente a cada una de las embestidas que los enemigos de la paz lanzan para torpedear su iniciativa. Que utilice los medios de comunicación y los canales y frecuencias, que son propiedad del Estado, para promover la paz. Que sea realista en sus planteamientos sobre el diálogo con la guerrilla, convocándola con todos sus jefes para que en el transcurso de las conversaciones y debates puedan ser desenmascarados aquellos que se muestran amigos de la paz pero que no desautorizan los actos terroristas, la destrucción del patrimonio común, ni los cobardes asesinatos de campesinos y ciudadanos inermes arrancados de sus hogares a altas horas de la noche para que pasen al sacrificio. Y también, para que en esos diálogos y los compromisos que se acepten, o rechacen, quede claro si quienes acuden como jefes de los grupos alzados en armas realmente son acatados hoy por sus subalternos y las fracciones que los integran, y se determine si hay sectores o fracciones que no responden a la disciplina que se supone los rige y, en consecuencia, que se declare que quedan fuera del proceso y de los acuerdos.

Y, finalmente, que todas las autoridades hagan frente al fenómeno "paramilitar", por constituir éste el mayor obstáculo para que el proceso llegue a la etapa de desmovilización de la guerrilla.

De lo expuesto concluyo que el Presidente Barco llevará adelante su Iniciativa de Paz en la medida en que él y todos sus colaboradores, en todos los niveles, hagan frente con decisión a estos obstáculos y retos, y a los que están por venir.